

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 3 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Dr. Liborio Yrigoyen, Secretario General del Gobierno del mismo Estado, fundándose en que la Legislatura erigida en Gran Jurado para conocer de sus faltas oficiales, había violado con sus procedimientos los artículos 14 y 20 de la Constitución federal; visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal, el fallo del inferior, y considerando:

Primero: que la ingerencia legítima de los jueces federales en casos como el presente, está estrictamente limitada á investigar si en el juicio han sido violadas las garantías del hombre, consignadas en la carta fundamental, sin que les sea lícito definir los términos del procedimiento ni el modo con que dichas garantías deben ser atacadas, bastando el hecho de haber sido.

Segundo: que consta en autos, que el solicitante recibió las citaciones necesarias para procurar su defensa, de donde se infiere que fueron suficientemente respetadas las garantías de que habla el artículo 20 de la Carta fundamental.

Tercero: que respecto de la legitimidad de la acusación, la brevedad de la instrucción y los términos todos del juicio con tal de dejar á salvo en lo sustancial los derechos del acusado, solo el Gran Jurado en que se erigió la 4ª Legislatura de Yucatan en uso de sus legales atribuciones, tiene derecho de decidir.

Cuarto: que no puede tacharse de incompetente á dicho Gran Jurado por no haber pronunciado el veredicto condenatorio con el número suficiente de representantes pues no se trataba de ley ó decreto de la Legislatura, sino del fallo de un Tribunal creado de antemano por la ley.

Quinto: que no teniendo impedimento al-

guno los representantes recusados, mientras no se hiciese respecto de ellos la declaración de haber lugar á la formación de causa, existía un *quorum* competente, y en consecuencia podía la Legislatura funcionar sin obstáculo alguno legal; con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del estado de Yucatan, en 16 de Diciembre de 1873, y en consecuencia, que la Justicia de la Union, no ampara ni protege al C. Liborio Yrigoyen, contra el veredicto del Gran Jurado que lo declaró culpable.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Garza.*—*Castañeda.*—*Ordaz.*—*Ramírez.*—*Lozano.*—*Castillo.*—*G. m. m. m. m.*—*Velsquez.*—*Zavala.*—*García.*—*Altamirano.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia, México Julio 23 de 1874.—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan por el C. Lic. Miguel Castellanos Sanchez, Vice-gobernador del Estado, contra el veredicto del Gran Jurado de la Legislatura de ese Estado que lo declaró culpable.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Resuelto el punto sobre la inmediata suspensión del acto reclamado, en este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Miguel

Castellanos Sanchez, contra el veredicto del Jurado que lo declaró culpable de faltas ministeriales, como Vice-gobernador del Estado, debe ahora debatirse y resolverse definitivamente el punto principal de la solicitud. Esta se apoya en la violacion de las garantías que á todo acusado otorga el artículo 20 de la Constitucion general de la República en sus cláusulas primera y quinta, es decir, en que no se hizo saber al C. Castellanos Sanchez, el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, y en que no se le oyó de modo alguno en su propia defensa.

Pero contra estas aseveraciones del actor, existen los documentos que anexó á su informe segundo, el Presidente de la H. Legislatura que se erigió en dicho Jurado, por que de ellos consta: que reiteradas veces se llamó al acusado á dar su declaracion instructiva, en cuyo acto sin duda habria sido impuesto de ambas cosas, si es que antes no se le habia instruido de una y otra.

Es verdad que el C. Castellanos Sanchez se negó con muy buenas razones quizá, á obsequiar el llamamiento del Jurado, á declarar sobre los hechos de la acusacion; pero esta no es ni puede ser una causa legal para que se diga que se violó la citada cláusula primera del artículo 20 de la Constitucion; por que si lo fuera, acontecería frecuentemente que un presunto reo cualquiera, se encerraria en el mas absoluto silencio, cuando por su Juez fuese interrogado, sabiendo que así ilusoriaba los efectos del proceso; y la garantía otorgada al individuo en la citada fraccion, se convertiría en daño de la Sociedad, porque la contumacia de los culpables dejaría impunes los delitos.

El Fiscal cree por tanto, que la falta de la declaracion instructiva del C. Castellanos Sanchez, no importa una violacion sino mas bien una renuncia de parte de él, de la repetida garantía constitucional. Tampoco se ha violado en concepto del infrascrito, la quinta del artículo mismo en que funda su queja, puesto que consta igualmente de las

adjuntas copias certificadas, que tambien se emplazó al acusado para emitir su confesion agravatoria á que se opuso, fundado principalmente en la inhabilidad de los ciudadanos diputados, contra quienes tenia entablada ya acusacion; pues fuera de que ni aun en los juicios judiciales cuando se hallan en sumario, se admiten recusaciones, ni se entra en la calificación de los motivos que inhiaban al Juez de la instruccion de las primeras diligencias de la causa, á la competencia federal no toca conocer y decidir si en efecto esos ciudadanos diputados están ó estaban impedidos legalmente de formar parte del Gran Jurado que conocia de la acusacion expresada.

A la jurisdiccion de la autoridad nacional que V. representa, solo incumbe saber si aquel Tribunal no se creó ó no estaba establecido previamente por la ley para juzgar al C. Castellanos Sanchez en su calidad de Vice-gobernador, á fin de ver si se cumplia la garantía que protege el artículo 14 de la Constitucion general de la República; pero esta fué cumplida en el caso de que se trata, porque el artículo 89 de la Constitucion del Estado, y de la que el infrascrito acompaña un ejemplar, dispone: que de los delitos oficiales que cometan los funcionarios de la categoría á que pertenece el quejoso en este juicio, conozca la Legislatura del Estado; de manera que este Tribunal ya existia establecido, nada menos que por la ley fundamental referida, con anterioridad á la existencia verdadera ó supuesta, de la falta oficial que juzga; y el C. Castellanos Sanchez, al aceptar su encargo de Vice-gobernador, quedó sometido á él, en cuanto al conocimiento de los delitos comunes ó ministeriales que le imputasen.

Ademas, la estrechez de los términos para la sustanciacion de esos juicios por jurados, no puede decirse que importe la violacion de las garantías de una justa y legítima defensa del acusado; tanto porque el mismo artículo 20 de la Constitucion que

las otorga, no fija esos términos, cuanto por que en los juicios por jurados, que son puramente administrativos, no puede exigirse toda la amplitud de los plázos concedidos, con igual objeto, en la sustanciación de los procedimientos judiciales que están sometidos á distintas reglas del Derecho.

Tampoco puede decirse que no existía el *quorum* competente de diputados para constituir el Jurado, y por consiguiente, que no llegó á formarse el verdadero Tribunal para pronunciar el veredicto que motiva la queja; porque el Jurado debía decidir *por mayoría de votos*, como dice el artículo 88 de la Constitución local citada, y esta mayoría así podía consistir en un voto mas de la mitad, como en un voto menos de todos los diputados presentes.

Si el C. Vice-gobernador hubiese sido destituido de su encargo por una ley ó decreto de la legislatura, para ese caso sí habría sido necesaria la presencia, por lo menos, de dos terceras partes de sus componentes, en conformidad con el artículo 43 de la repetida Constitución del Estado; pero como no es una ley ni decreto el que destituye de su empleo al actor, sino un veredicto que lo declara culpable, no ha sido necesario para la votación, ese número de votantes que se consideran indispensables para que este sea válido.

Explicando Escribhe en su Diccionario de Legislación; las diferencias que hay entre los jurados ó jueces de hecho y los tribunales ó jueces de derecho, dice, que se distinguen en tercer lugar: "en que los de derecho ejercen jurisdicción y pronuncian sentencia condenatoria ó absolutoria, aplicando en su caso las penas que la ley prescribe; y los de hecho no tienen otra facultad, que la de hacer una mera declaración sobre la gravedad de las presunciones que militan contra uno para seguir la acusación, ó sobre la certeza ó falsedad, existencia ó inexistencia, justificación ó falta de justificación de los derechos que se les proponen, y culpabilidad ó inocencia del acuerdo. Cuarto: en que los

derechos en las causas que exclusivamente estan sometidas á su juicio, en cuanto al hecho y al derecho, tienen que ajustarse para la calificación ó estimación del valor de las pruebas, á las reglas que la ley les ha dictado al efecto; y los de hecho, en las causas en que intervienen no están obligados á guiarse por reglas fijas en la calificación ó estimación de las pruebas, sino por su buen sentido, por su propia convicción, por su conciencia, por la impresión que las mismas pruebas les causen."

Tal es la base en que descansa la eminentemente democrática institución del Jurado, base aceptada por nuestras leyes generales y particulares, y que nosotros minaríamos, si fuésemos á calificar la justicia ó injusticia del veredicto que ocasiona este juicio de amparo, para deducir de allí su procedencia ó improcedencia. Será injustísimo como cree sinceramente el fiscal que lo es, declarar infractor al C. Vice-gobernador Castellanos Sanchez, de la ley ó decreto de 19 de Junio último, cuyos dos únicos artículos no sabe el infrascripto de que modo han podido ser infringidos por aquel; pero no es posible entrar en ese examen para calificar la procedencia del recurso, sin riesgo de invadir la esfera de la soberanía del Estado, que también está puesta bajo la protección de los tribunales de la Federación. No debe tampoco ser motivo suficiente á conceder el recurso invocado, la consideración de lo que el declarado culpable sufra en su honra, ni el temor de las complicaciones que puedan surgir en la sociedad, de su separación del poder público que ejerce; porque si se estableciese este precedente como fundamento de todo amparo, bien podía cualquiera á quien se declarase bien preso por algun delito, intentar con buen éxito aquel recurso, por que su honra sufriría, y mucho, diciéndose en el auto respectivo que se le aprisionaba por presunciones de homicidio, por ejemplo.

Y sin embargo: ¿podrá amparar la Justicia de la Union á quien está sometido á

la del Estado, aunque además de la honra esté padeciendo también su libertad? es evidente que no.

Y menos podrá otorgarse el amparo, por el riesgo de las perturbaciones públicas resultantes de la ejecución del veredicto contra el cual se interpone este recurso; pues solo sirve para hacer efectivas las garantías constitucionales del individuo, y no las funciones sociales del empleado, que serían las violadas en tal caso, y por que si hay peligro de graves complicaciones provenientes de la separación del C. Vice-gobernador del Estado, mayores y mas graves pueden provenir de su permanencia en el puesto que ocupa, si no se cumple con aquella declaración de la Asamblea del Estado; pues tratándose ambos poderes de potencia á potencia, cada cual emplearía los medios de que dispone para hacerse obedecer, y la sociedad tendría mucho que perder en esta escandalosa lucha de los que tienen á su cargo el deber de dar ejemplo al pueblo de orden y respecto á la ley, para encaminarlo por una era de paz y tranquilidad, á su cultura y engrandecimiento.

Esta exposicion que el fiscal protesta haber hecho sin odio ni afeciones á ninguno de los bandos políticos que aspiran al Gobierno del Estado, mas que en sus propios sentimientos ha sido inspirada en las reglas del Derecho constitucional de la Nacion, y particular de este Estado, y en las diversas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia, pronunciadas en distintos casos análogos al presente, que se encuentran publicados en el Semanario Judicial, tomo 2º, entrega 4ª, pág. 82, id. 29, pág. 187, id. 33 pág. 281, y tomo 3º pág. 582 entrega 85; porque es regla de jurisprudencia, que en donde milita la misma razon, allí debe aplicarse la misma disposicion de derecho; y si pues el primer Tribunal de la República, ha decidido que no era de concederse el amparo al C. Vice-gobernador de Querétaro Leandro Muzquiz, que lo solicitó contra el Gobernador de aquel Estado que lo des-

TOMO V.—PARTE II.

tituyó de su encargo de Prefecto del Distrito del Centro, por que tuvo en consideracion, la Suprema Corte de Justicia, "que la suspension del C. Muzquiz en sus funciones de Prefecto del Distrito del Centro, es una providencia, que en manera alguna afecta su persona; y que en consecuencia, si esa medida puede ser materia de una cuestion que resuelvan las leyes del Estado, sobre las funciones oficiales que se disputan, no puede ser objeto de violacion de garantías individuales"; el fiscal tiene que concluir, como en efecto concluye pidiendo á V-, con fundamento del artículo 20 de la Constitucion general de la República, del 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, del 41 del citado Código fundamental de la República, declare.

Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Vice-gobernador de este Estado, Lic. Miguel Castellanos, contra el veredicto de la H. Legislatura que lo declaró culpable, con fecha 3 del corriente.

Segundo: que se publique el fallo que V. pronuncie en cualquier sentido, y que se eleven originales los autos de este juicio á la Suprema Corte de Justicia, en cumplimiento de lo que previenen los artículos 13 y 27 de la citada ley orgánica.

Mérida, Noviembre 16 de 1873.—*P. Híjuelos.*

Es copia que certifico. Mérida, Diciembre 31 de 1873.—*Prudencio Híjuelos.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Diciembre 26 de 1873.— Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Miguel Castellanos Sanchez, Vice-gobernador en ejercicio del poder Ejecutivo del Estado, contra el veredicto del gran Jurado que lo declaró culpable, violando en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 20 de la Car-

ta federal de los Estados Unidos Mexicanos. Visto lo informado por la autoridad responsable, sobre la suspensión del acto reclamado; el pedimento fiscal, el auto en que se suspendió dicho acto; lo informado sobre lo principal; el dictamen fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado en definitiva; la citación para sentencia, y enante mas fué necesario.

Considerando: que la Legislatura del Estado, erigida en gran Jurado, declaró culpable al quejoso en el veredicto que pronunció el 3 de Noviembre último, foja 1ª, por infracción de la ley de 19 de Junio del presente año, y la frac. 2ª, artículo 58 de la Constitución local.

Considerando: que dicha ley de 19 de Junio, compuesta de dos artículos, declara en primero, usurpadora y anárquica la administración creada en aquella fecha, y en el segundo, nulos y de ningún valor todos los actos y disposiciones que emanasen de ella, incurriendo los que la apoyaron y obedecieron, en las penas del artículo 912 del Código penal del Estado.

Considerando: que el acusador C. R. Portas, fundó su acusación contra el actor, en estos dos cargos; 1º: que el C. Vice-gobernador Miguel Castellanos Sanchez, infringió la ley de 19 de Junio último, nombrando Gefe político de Motul al C. Rvaristo Esquivel, que asegura estaba bajo la sanción de dicha ley, por haber apoyado á la administración intrusa y anárquica del C. Teniente Coronel J. B. Cuito; 2º: que ha faltado á la frac. 2ª del artículo 58 de la Constitución local, no cumpliendo con el deber que le impone la misma, de guardar y cumplir dicha Constitución y las leyes de la Legislatura.

Considerando: que la Legislatura erigida en gran Jurado se convierte en Tribunal, y los diputados en los Jueces que lo forman, cuyo Tribunal reunido para declarar ó no culpables á los altos funcionarios, en sus delitos oficiales, sigue un juicio criminal, por lo que debe conceder al acusado todas las

garantías que señala el pacto federal, puesto que la ley es igual para todos los CO., tengan ó no representación oficial, procediendo el recurso de amparo, caso de no concedérselas.

Considerando: que aun cuando el Gran Jurado conservase su carácter de Legislatura, también procedería el recurso, siempre que violase las garantías individuales; así por que el artículo 101 constitucional al establecer el juicio de amparo, los concede contra las leyes ó actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, como porque en la discusión de este artículo, una de las cosas que se propusieron los constituyentes, fué establecer un remedio contra los abusos de los congresos. A este propósito, el diputado Moreno se expresó en estos términos: "*Se ha dicho que los tribunales van á ser un poder conservador, y como tal los admito, porque no van á legislar sino á salvar la Constitución y las garantías individuales. Es indudable que los congresos pueden excederse en sus facultades, y se quiere que para estos casos, de una manera pacífica encuentren garantías los ciudadanos cuyos derechos se conculquen.*" Historia del Congreso constituyente, por el Sr. Zarco, tomo 2º, página 504.

Considerando: que el juicio seguido por el Gran Jurado inició el 31 de Octubre próximo pasado, fojas 62 vuelta, y terminó el 3 de Noviembre último, fojas 84 hasta la 87, es decir, que apenas duró el angustiado término de tres días; que en tan breve tiempo no era posible dar al acusado las garantías constitucionales requeridas en todo juicio criminal.

Considerando: que al tomársele su declaración preparatoria, no la dió, sino que alegó la excepción de recusar á los que instruían la causa, y á la vez se negó á declarar, porque no reconocía como juez legítimo al que hacía de instructor, fojas 70 vuelta y 71; y sin apremiarlo dos ó tres veces para que la rindiera, declarándolo rebelde en caso negativo, como dispone la ley 2,

tit. 9 Tab. 11 Novísima Recopilacion; á fin de dar por practicada la actuacion, mandaron que se le recibiera su confesion con cargos, en abierta oposicion con la fraccion 2ª artículo 20 de la Constitucion federal.

Considerando: que no sólo no le recibieron su confesion con cargos; pero ni aún le ministraron los datos del expediente para preparar sus descargos, foja 72 y vueltas faltando á la fraccion 4ª del citado artículo 20 constitucional; que tampoco se le oyó en defensa, ni se le nombró defensor de oficio, fojas 73, contra lo dispuesto en la fraccion 5ª del mismo artículo constitucional.

Considerando: que aun cuando se quisiera decir que el juicio segundo contra el Lic. Castellanos Sanchez, no es judicial, sino político, por lo que no debe estar sujeto á las formas tutelares del referido artículo 20 constitucional, esto no es cierto, porque no hay ley que lo determine; antes al contrario, segun el artículo 21 de la Constitucion federal, la aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial, debiendo reputarse judicial el veredicto de culpabilidad, que no es sino una sentencia condenatoria; pero dado caso que el juicio se considerase como político, no por eso dejaria de ser criminal; y el artículo 20 mencionado se contrae á todo juicio criminal.

Considerando: que por la certificacion fojas 45, de los notarios públicos, ciudadanos José C. Aguilar y Eligio Guzman, el decreto de 19 de Junio del presente año, acumulado á fojas 12, impreso en México en la imprenta de V. G. Torres, queda probado que no se ha publicado en el periódico oficial *La Razon del Pueblo*, órgano en que se acostumbra promulgar las leyes en este Estado, careciendo por tanto de promulgacion, requisito sin el cual no puede llamarse ley, artículo 85 de la Constitucion general, y 58 de la local; porque la promulgacion, *es el acto por el que las leyes se notifican á la sociedad, es la voz viva del legislador.* Escribire, Diccionario de Legislacion, artículo "Ley."

Considerando: que no pudiendo llamarse ley la de 19 de Junio citada, el quejoso no ha podido faltar á ella, ni menos á la fraccion 2ª, artículo 58 de la Constitucion del Estado, sobre no cumplir con el deber de guardar dicha Constitucion y las leyes de la Legislatura; que por consiguiente, no puede suponerse comprendido en la sancion penal de aquella, por cuya razon se ha violado en su persona el artículo 14 de la Constitucion federal, en la parte que dice: *«Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho etc.»*

Considerando: que segun el artículo 29 de la Constitucion local, la Legislatura no podrá instalarse sin la presencia de mas de la mitad del número total de los diputados que deban integrarla, los cuales siendo catorce, es claro que con ocho hay *quorum* y puede erigirse en Gran Jurado, como lo hizo en el juicio de que se trata, cuyo veredicto fué votado por nueve diputados, fojas 37, no habiendo por lo mismo, infraccion constitucional en la formacion del Tribunal. Por estos legales fundamentos y de conformidad con los artículos 14, 20, 85, 101 de la Carta federal, la autoridad, en nombre de los Supremos Poderes, falla: 1º La Justicia de la Union ampara y protege al C. Miguel Castellanos Sanchez, contra el veredicto del Gran Jurado que lo ha declarado culpable, violando en su persona las garantías individuales que otorgan, los artículos 14 y 20 de la Constitucion federal, 2º: Sáquese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos en revision á la Corte Suprema de Justicia Nacional, con arreglo á los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de amparo de 20 de Enero de 1869.

Hágase saber.—*I. Manzanilla*.—Ante mí:—*José Anacleto Castillo*.

Es copia que certifico, para su publicacion en el *Semanario Judicial* de la Federacion. Mérida, Diciembre 31 de 1873.—*José A. Castillo*.—secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 3 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Lic. Miguel C. Sanchez, como encargado del poder ejecutivo del mismo Estado, fundándose en que la 4ª Legislatura del propio, erigida en Gran Jurado para conocer de sus faltas oficiales, había violado con sus procedimientos los artículos 14 y 20 de la Constitución federal; visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas; lo alegado por el quejoso; el parecer fiscal, el fallo del inferior, y considerando:

1º Que la ingerencia legítima de los jueces federales en casos como el presente, está extrictamente limitada á investigar si en el juicio han sido violadas las garantías del hombre consignadas en la Carta fundamental, sin que les sea lícito definir los términos del procedimiento, ni el modo conque dichas garantías deben ser atacadas, bastando el hecho de haberlo sido.

2º Que consta de autos que el solicitante recibió las citaciones necesarias para procurar su defensa, de donde se infiere que fueron suficientemente respetadas las garantías de que habla el art. 20 de la Constitución.

3º Que respecto de la legitimidad de la acusacion, la brevedad de la instruccion y los términos todos del juicio, con tal de dejar á salvo en lo sustancial los derechos del acusado, solo el Gran Jurado en que se erigió la 4ª Legislatura de Yucatan, en uso de sus legales atribuciones, tenía derecho de decidir.

4º Que no puede tacharse de incompetente á dicho Gran Jurado, por haber pronunciado el veredicto condenatorio sin el número suficiente de representantes, pues no se trataba de una ley ó decreto de la Legislatura, sino del fallo de un Tribunal creado de antemano por la ley.

5º Que no teniendo impedimento alguno los representantes recusados mientras no se

hiciese respecto de ellos la declaracion de haber lugar á la formacion de causa, existía un *quorum* competente, y en consecuencia podia la Legislatura funcionar sin obstáculo alguno legal.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución se declara:

Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de Yucatan en 16 de Diciembre de 1873, y en consecuencia, que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. M. Castellanos Sanchez, contra el veredicto del Gran Jurado que lo declaró culpable.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia publíquese; y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.—P. Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Manuel de Castañeda y Nágera.—P. Ordáz.—Ignacio Ramirez.—José M. Lozano.—Simon Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—J. G. Ramirez.—I. Altamirano.—Enrique Landu*, secretario.

Es copia. México, Marzo de 1874.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Genovevo Pavon, contra el Gefe político de Irapuato, por violacion de garantías en la causa eriminal que le instruyó por el delito de robo con asalto.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que ha examinado la causa instruida al reo Genovevo Pavon, por el delito de asalto cometido en la hacienda del Copal y en su concepto, la